



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, febrero 16 de 2023

Radicado: 05001 31 05-011-2018-00721-01
Demandante: ALONSO EDUARDO ARAQUE GUZMÁN
Demandado: COLPENSIONES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

Alonso Eduardo Araque Guzmán anunciándose como cónyuge de la pensionada Olga de Jesús Alzate Acevedo fallecida el 29 de abril de 2017, pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con el pago del retroactivo al igual que los intereses de mora.

Pretensiones a las que se opuso Colpensiones refiriendo que no se satisface el presupuesto de convivencia hasta el momento del fallecimiento.

En decisión de primera instancia, tras advertir que conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, el acceso a la pensión de sobreviviente

en favor del cónyuge y/o compañero (a) permanente requiere de la demostración de una convivencia en un tiempo no inferior a 5 años, destacando que en caso de presentarse una separación de hecho es menester que hasta el momento del fallecimiento pervivan los lazos efectivos, morales, de socorro y de ayuda mutua, esto último de cara a la interpretación efectuada por la Sala de Casación Laboral de la CSJ.

Bajo esta premisa valoró las pruebas recaudadas, en particular el interrogatorio al demandante quien aceptó que a partir del año 1997 cesó la convivencia con su esposa, que inició otra relación con Claudia Valencia por quien reclamó judicialmente los incrementos pensionales en el año 2010 donde declaró que convivió con esta por más de 17 años; sin hallar elementos de juicio en la prueba testimonial recaudada, ya que uno de ellas resultaba sospechosa al ser hermana del demandante, mientras que los demás declarantes basaron sus dichos en aquello que narró el demandante.

Así las cosas, sin que se presentaran los elementos de prueba respecto a la continuidad de los lazos de solidaridad posterior al año 1997, negó las pretensiones del actor a quien gravó en costas.

Inconforme con la providencia fue recurrida por la activa insistiendo en la procedencia de la prestación la que de cara a las premisas del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no exige ningún vínculo afectivo y de solidaridad posterior a la separación de hecho, destacando que conforme a los dichos de los testigos y el demandante los cónyuges nunca tuvieron intención de divorciarse, y continuaron prestándose ayuda.

Reprochó la tacha a los testigos quienes conocieron de los hechos declarados, aunado a que no puede predicarse una sospecha por el simple vínculo consanguíneo, toda vez que son estos quienes pueden dar fe de las condiciones familiares.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 Colpensiones presentó escrito donde reitera los argumentos por los que se opone a la procedencia de la prestación.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver las controversias planteadas encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que el 22 de diciembre de 1976 Alonso Eduardo Araque Guzmán y Olga de Jesús Alzate Acevedo contrajeron matrimonio católico según registro civil que obra sin nota de cesación de efectos civiles, ni liquidación de sociedad conyugal (pág 35 expediente escaneado); **2)** que mediante resolución N° 025295 del 17/12/2005 el extinto ISS reconoció al Olga de Jesús Alzate la pensión de vejez (así indica la resolución SUB 104124 de 2018 – Pág . 21/26) **3)** que la pensionada falleció el 29 de abril de 2017 (pág . 37); **4)** que el 5 de abril de 2018 el señor Araque Acevedo solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada en resolución SUB 104124 de 20118 aduciendo no cumplir con el requisito de la convivencia en los 5 años previos al deceso de la pensionada (pág. 21/26).

Bajo estas premisas y atendiendo a los aspectos objeto de apelación por la activa, corresponde a esta corporación determinar si el señor Alonso Eduardo Araque Guzmán es beneficiario de la prestación reclamada.

Para dilucidar tal asunto y dada la fecha de fallecimiento de la pensionada Olga de Jesús Alzate Acevedo el **29 de abril de 2017**, debe acudir a la norma vigente para tal data, esto es la **Ley 797 de 2003 artículo 13 literal a**, que permite el acceso de la pensión del cónyuge y/o compañero (a) permanente supérstite.

Sobre la interpretación de tal norma, acude la Corporación a la visión dada por la Sala de Casación de la CSJ que indica que quien alega la calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente, pero separado de hecho, basta con demostrar una convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, sin que deban pervivir hasta el momento del deceso del causante; exigencia que no está contenida en la redacción de la norma, y que llevaría a desconocer las diversas dinámicas personales de quienes pese a

convivir como cónyuges por espacio superior a 5 años, optaron por un rumbo de vida separado, sin poner fin a los efectos civiles y patrimoniales del vínculo matrimonial.

Dinámicas personales que en el ámbito jurídico merecen un reconocimiento, y por tanto dan lugar al acceso de los derechos pensionales, sin que sea menester demostrar que hasta el momento del fallecimiento del cónyuge se generaron actos de solidaridad y acompañamiento que comporten un vínculo dinámico y actuante, requisito que no consagra la norma, que no es esencial a la obligación entre cónyuges conforme al artículo 176 del Código Civil y que implica desconocer que la pareja unida por vínculos civiles y/o religiosos permaneció unida durante un lapso significativo que ayudó a la construcción del derecho pensional que otorga el sistema.

Se destaca que pese a que la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria otrora acuñó el requisito de un vínculo dinámico y actuante como presupuesto adicional para el acceso a la pensión de sobrevivientes en casos análogos al acá referido (a modo de ejemplo la sentencia SL 4099 de 2017), tal tesis fue abandonada restringiéndose a los requisitos señalados en la norma, que en caso de cónyuge sobreviviente lo es una convivencia de por lo menos 5 años en cualquier momento. Al respecto la sentencia SL 2015 de 2021, que a su vez se remite la decisión SL 5169 de 2019, de esta última se extraen apartes esenciales:

“...Claro lo anterior, la Sala debe determinar, según lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, si para acceder a una pensión de sobrevivientes, quien alega la calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separación de hecho, debe demostrar, además de la convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, que los lazos afectivos permanecieron inalterables hasta el momento de deceso del causante.

(...)

Pues bien, de la normativa transcrita se colige que, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho del causante, la acreditación para el momento de la muerte de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, configura un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b). Nótese

que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

Por lo demás, ese es el alcance que al precepto en comento le ha dado esta Corporación, pues su jurisprudencia de manera reiterada ha adoctrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado o afiliado en un periodo de 5 años», puede ser acreditado en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL 41637, 24 en. 2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, , CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019 y CSJ SL4047-2019).

Justamente, esa es la teleología y alcance del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se reitera, no dejar desamparado(a) al(la) cónyuge supérstite separado(a) de hecho que mantiene el vínculo marital vigente, quien en su momento aportó a la construcción del derecho pensional del causante; pero, además, su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos.

Por ello, es totalmente desafortunado entender que el derecho no ampare a la cónyuge separada de hecho que concluyó su relación de convivencia de tal forma, que no tiene en su perspectiva continuar manteniendo lazos de afecto con su esposo.

De hecho, aun cuando el artículo 176 del Código Civil establece obligaciones a los cónyuges, entre aquellas no están las de mantener los «lazos afectivos», la «comunicación solidaria» y los «lazos familiares» hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos.

Precisamente, la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a

cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma”.

Premisas que resultan de total relevancia al caso concreto, por cuanto la pensión es pretendida por el cónyuge con quien se demuestra nunca se rompieron los lazos jurídicos ni patrimoniales. Y conforme al precedente jurisprudencial citado para el acceso a la prestación no es menester demostrar que, culminada la vida en pareja por ruptura de facto, se dé continuidad de los lazos de solidaridad, ayuda, acompañamiento, en tanto el acceso a la prestación estará mediado por la demostración de una convivencia en tiempo superior a 5 años.

Con estos presupuestos se descende al caso concreto, estando por fuera de discusión la celebración del rito católico el 22 de diciembre de 1976 que dio inicio a la vida marital de Alonso Eduardo Araque y Olga de Jesús Alzate Acevedo, sin que se hubiera protocolizado liquidación del vínculo civil ni patrimonial (pág 35 expediente escaneado):

En cuanto al tiempo de convivencia efectiva entre la pensionada fallecida y el actor fueron escuchados los testigos Gloria Araque, Luis Carlos Jaramillo y Omaira del Socorro Cañas, quienes de forma conjunta expusieron que la pajera antes referida contrajo matrimonio en 1976, que procrearon 2 hijos y que compartieron como cónyuges hasta el año 1997, momento en que Alonso Eduardo se retiró de hogar dando inicio a otra relación sentimental con la señora Claudia Valencia.

La testigo **Gloria Araque** (tiempo de la audiencia minuto 28 en adelante) , hermana del demandante expuso que la convivencia de la pareja fue armoniosa, que en este hogar se procrearon 2 hijos por quienes Alonso siempre fue responsable de su manutención, que al momento de la separación tenían 16 y 18 años, que subsistió un compromiso de acompañamiento entre los cónyuges, la pareja acudía a reuniones familiares con

regularidad, lo que permitió que los lazos se extendieran a los demás miembros de la familia extensa de Alonso Araque, donde Olga y sus hijos siempre fueron bienvenidos, incluso después de la separación en el año 1997 y en particular en los momentos de enfermedad de Olga, pues Alonso frecuentemente asistía con ella a las citas médicas, fue acompañante en los tiempos de hospitalización y estuvo en las honras fúnebres. Reseñó que para el momento del fallecimiento de Olga de Jesús los hijos de este matrimonio eran mayores de edad.

Luis Carlos Jaramillo (tiempo de la audiencia minuto 53 en adelante) anunciándose como compañero de trabajo del accionante expresó conocerlo de larga data, que conoció ambas compañeras sentimentales, inicialmente a Olga de Jesús con quien Alonso contrajo matrimonio, procreó hijos, indicando que este testigo tenía contacto regular con esta familia, asistió a eventos familiares como la primera comunión y quince años de Alejandra la hija de la pareja. Supo que la pareja se separó en el año 1997, sin saber la razón, pero si expuso que aquel dio inicio a una nueva relación sentimental con Claudia Valencia. Que posterior a la separación con Olga seguía teniendo contacto con esta para efectos de sostenimiento de los hijos comunes, los que para la fecha de esta diligencia eran mayores de edad.

Dichos que replicó **Omaira del Socorro Cañas** (tiempo de la audiencia 1:32:00) quien refirió ser la esposa de Luis Carlos Jaramillo y en razón de ello conoció a Olga de Jesús y al demandante, quienes como esposos convivieron hasta el año 1996 ó 1997 en el barrio El Salvador de Medellín donde los visitó ocasionalmente denotando una relación cordial, con apoyo entre cónyuges y cumplimiento de los deberes de Alonso para con sus hijos.

En adición, el fallador de instancia hizo referencia a la existencia de un proceso judicial de reconocimiento de incrementos pensionales adelantando por Alonso Eduardo Araque para su compañera permanente Claudia Granados Valencia, proceso de radicado 05001-31-05-007-2010-00210 del que obra copia de la sentencia del 30 de julio de 2010 (archivo 00513773000000008292671005701A- expediente administrativo)

del cual el fallador hizo lectura de algunos de los apartes de la sentencia (minuto 23 de la audiencia), en particular de los dichos de los testigos Carmenza Bernarda Correa y Luz Marleny Fernández de Yepes, quienes de forma conjunta declararon que Alonso y Claudia Eugenia Granados Valencia iniciaron convivencia 17 años previos a la diligencia (año 2010) lo que sitúa el inicio de la relación en el año 1993.

Son estos los elementos de prueba, los que valorados en conjunto permiten concluir que se satisfacen los presupuestos de causación de la prestación deprecada, esto es una convivencia con el ánimo de permanencia por espacio no inferior a 5 años en cualquier momento.

Se demostró que desde el 22 de diciembre de 1976 se dio inicio al proyecto de vida en común, donde se procrearon 2 hijos, de quienes se enuncia que para el momento de la separación tenían 16 y 18 años, además el testigo Luis Carlos Jaramillo expresó que para la primera comunión y celebración de los 15 años de la Alejandra Araque subsistía la vida en común.

Y si bien no existe paridad en las declaraciones de este trámite y aquellas escuchadas dentro del proceso de reconocimiento de incrementos pensionales 05001-31-05-007-2010-00210, queda establecido que por lo menos hasta el año 1993 entre Alonso Eduardo Araque y Olga de Jesús Alzate persistía el vínculo matrimonial y la cohabitación bajo el mismo techo, el sostenimiento de un hogar, así como el cuidado y manutención conjunta de los hijos, data para la cual se acumulaban al menos 16 años de vida común, tiempo suficiente para el acceso a la prestación, a la que habrá lugar a partir del fallecimiento de la pensionada 29 de abril de 2017 en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales, en tanto esta responde a los mismos contornos de la prestación que se sucede y conforme enuncia la resolución SUB 104124 de 2018 de aquella que disfrutaba la señora Alzate Acevedo fue efectiva a partir del 1° de enero de 2005,

cumpliendo así con los requisitos del Acto legislativo 01 de 2005 respecto al acceso de ambas mesadas adicionales.

Calculado el retroactivo pensional causado entre el 30 de abril de 2017 y el 31 de enero de 2023 asciende a \$70´101.133, suma de la cual se autoriza a Colpensiones a efectuar el descuento de los recursos con destino al sistema de seguridad social en pensiones, valores que no fueron afectados por la prescripción extintiva ya que entre su causación (30/04/2017) la primera reclamación (05/03/2018) e incluso la presentación de la acción judicial (04/12/2018) no transcurrió un tiempo superior a 3 años.

Año	Valor mesada	Nº mesadas	Sub total
2017	\$ 737.717	10,033	\$ 7.401.515
2018	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023	\$ 1.160.000	1	\$ 1.160.000
TOTAL			\$ 70.101.133

A partir del 1° de febrero de 2023 Colpensiones seguirá cancelando al demandante la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

Relativo al reconocimiento por intereses de mora de tal gravamen se absolverá a Colpensiones, pues si bien esta se impone en los eventos que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio, tal regla se excepciona cuando existan serias y reales dudas respecto al titular del derecho pensional o cuando el reconocimiento provenga de la variación de la jurisprudencia o criterio del intérprete superior (al respecto la sentencia CSJ SL 4193 de 2022), como ocurrió en el presente evento donde para la data en que se emitieron las resoluciones en sede administrativa el criterio de la Sala de Casación de la CSJ imponía la verificación de criterios adicionales los que de forma cierta impedirían el acceso pensional.

Así las cosas, se absuelve de tal gravamen, generando en subsidio la indexación de las condenas a efectos de mantener el poder adquisitivo de los créditos adeudados.

Resta por indicar que se condenará en costas en ambas instancias a Colpensiones, reducidas las de primera instancia al 50% dada la prosperidad parcial de las pretensiones. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV en favor del demandante.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos de apelación

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA** la providencia impugnada en el sentido de indicar que el señor **ALONSO EDUARDO ARAQUE GUZMÁN** es beneficiario de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Olga de Jesús Alzate Acevedo, prestación cuyo disfrute data desde el 30 de abril de 2017 en cuantía de 1 SMLMV a razón de 14 mesadas anuales.

Calculado el retroactivo pensional causado entre el 30/04/2017 y el 31/01/2023 asciende \$ 70'101.133, de los cuales se autoriza a Colpensiones a efectuar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud. Suma que se pagará indexada.

Se absuelve de la pretensión de intereses de mora e impróspera la excepción de prescripción.

Costas en ambas instancias a Colpensiones, reducidas las de primera instancia al 50% dada la prosperidad parcial de las pretensiones. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV en favor del demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

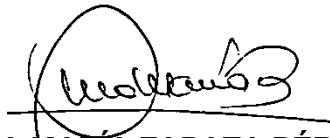
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-011-2018-00721-01
Demandante: ALONSO EDUARDO ARAQUE GUZMÁN
Demandado: COLPENSIONES
Decisión: **REVOCA**

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 22 de febrero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm
y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día
hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con
el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO